



MATERIA: PENAL

QUEJOSO Y RECURRENTE:

POR CONDUCTO DEL
SECRETARIO TÉCNICO DE
COMBATE A LA TORTURA,
TRATOS CRUELES E
INHUMANOS DEL INSTITUTO
FEDERAL DE DEFENSORÍA
PÚBLICA*

PONENTE:

VANESSA DELGADILLO
HERNÁNDEZ, SECRETARIA EN
FUNCIONES DE MAGISTRADA
DE CIRCUITO

SECRETARIO:

LIC. JAIME RAMÍREZ MOLINA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acuerdo del

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito,

**correspondiente a la sesión de seis de
noviembre de dos mil veinte.**

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

ación
ado el

Por ocurso presentado el **ocho de junio**
de dos mil veinte, ante la Oficialía de partes del

***** en su carácter de
Secretario Técnico de Combate a la Tortura,
Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal
de Defensoría Pública, promovió juicio de amparo
indirecto, contra las autoridades y actos a
continuación se transcriben:

“1. ***** ***** , titular de la
Fiscalía General de la República, con
domicilio público ubicado en... (...).

2. *****, Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con domicilio público ubicado en ... (...).

3. ***** , Titular de la
Fiscalía Especial en Investigación del
Delito de Tortura, con domicilio ubicado
en ... (...)"

ACTOS RECLAMADOS:

La omisión de investigar inmediatamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable, actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados, conforme a los estándares Nacionales e Internacionales en materia de Derechos Humanos.

La omisión de supervisar que el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, investigue de manera inmediata, con la debida diligencia y en un plazo razonable, actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados, conforme a los estándares Nacionales e Internacionales en materia de Derechos Humanos.

De acuerdo con el ejercicio de la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General de la República, las omisiones en la coordinación y supervisión de la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en lo que atañe a la investigación inmediata, con la debida diligencia y en un plazo razonable de actos de tortura, tratos o penas crueles,

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo ante el Juez de Distrito.

Por auto de **ocho de junio de dos mil veinte**, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula, Chiapas, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la tuvo por recibida y la registró bajo el expediente *********; asimismo, previno a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación de dicho auto, aclarara lo siguiente:

1) Cuál es el acto que reclamó a las autoridades responsables, esto es, precisara si lo que reclamó era la omisión de acordar el escrito de siete de septiembre de dos mil diecinueve o la

de To
rió en

sara lo

ando info
ntraba

SO.

Dicho acuerdo es el impugnado en el presente recurso.

Por escrito presentado de manera electrónica, el **quince de junio de dos mil veinte**, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, *****

les e
oría Pu
auto d
en el a
do órga

iséis d
o Fed
queja y
n las c
l Tribu
el Vigés

idamer
mparo

CUARTO. Trámite del asunto.

Mediante acuerdo de **dieciocho de**
mbre de dos mil veinte, se turnó el

es, pa
espond

404/20
e Carr
ederal,
Vane
scrita
oeñar la
partir d
hasta
Pleno
scriba n

do de
dos

CONSIDERANDO:

Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito Judicial es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, de conformidad con el Acuerdo General 43/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil quince, relativo a la

JAIIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a:66.20.63.6a:66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

El recurso de queja que nos ocupa fue interpuesto dentro del plazo de cinco días dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, lo cual se resume en el cuadro siguiente:

NOTIFICACIÓN	SURTE EFECTOS	SÁBADO Y DOMINGO	DÍA DECLARADO INHÁBIL	FENECE PLAZO	PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA
11 de junio de 2020 (fojas 59 a 61 del juicio de amparo indirecto).	12 de junio de 2020 (Artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo).	13 y 14 de junio de 2020.	Ninguno.	19 de junio de 2020.	15 de junio de 2020 (Día 1).

TERCERO. El acuerdo recurrido es el tenor siguiente:

**“Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas;
diez de junio de dos mil veinte.**

Agréguese a los autos el ocuro signado por *** , Titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Cruelos e Inhumanos del Instituto de Defensoría Pública, en nombre del quejoso ***** , por el que pretenden dar cumplimiento a la prevención que le fue hecha en auto de ocho de junio de dos mil veinte (fojas 29-33).**

Atento a lo anterior, con el objeto de proveer lo conducente, es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, se procede al estudio de las causas de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procederá al desechamiento de plano de la demanda de amparo.

“La inacción de las autoridades señaladas como responsables en la investigación adecuada y diligente de los probables actos de tortura o malos tratos cometidos en perjuicio del directo quejoso *****
***** ”

“ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.”

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a:66.20.63.6a:66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...).”

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el

Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto.

Por otra parte, resulta oportuno destacar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente:

En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.”

Para sustentar lo anterior, resulta conveniente exponer la interpretación que ha realizado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resolver la contradicción de tesis 233/2017.

Asimismo, determinó que de la interpretación sistemática de los preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa

Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno.

En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas.

Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar

Asimismo, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación.

No obstante que el artículo 258 del citado ordenamiento, establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir.

Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente.

La primera consiste en que –generalmente– la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control, así como que la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de Control –en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho–, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos.

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

idad de
omision
e Contro
virtud d
e las par
nducente
l efecto
usca in
proceso
damenta
ción de
mpo rea
iento, co
mediata,
convierta
gotarse s

ión o in
etapa d
víctima
del me
del Cód
n ese se
n constit
dicho me
se actual
el artíc
ro, en
apartado

nes dier
18 (10a)
era Sala
ción, de

nes diero
18 (10a)
era Sala
ción, de

ACUSA
STERIO
VESTIGA
TE EL
ES DEL

“SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

“SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a

Conforme a lo anterior, se determina que los actos reclamados por el promovente a las autoridades responsables, que hizo consistir esencialmente en la inacción de la Fiscalía General de la Republica, Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, residentes en la ciudad de México, señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, en la investigación adecuada y diligente de los probables actos de tortura o malos tratos cometidos en perjuicio del directo quejoso *****
*****; encuadra en los supuestos que deben ser impugnados por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicha omisión por parte de la representación social de otorgarle al impetrante en su calidad de víctima las medidas de protección, se trata de una inactividad de esa autoridad que acontece en la fase inicial de una investigación de un hecho delictuoso.

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Por tanto, si en el presente asunto se obtiene, que el promovente, antes de promover la acción constitucional, no interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello repercute en que se actualice la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia.

"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en virtud de que el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito

En tales condiciones, debe agotar el recurso o la controversia señalada al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo.

Es así, porque de acuerdo a dicho principio, el cual rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipuló en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente.

Consecuentemente, en términos de los artículos 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida ***** ***** *****
***** , en representación del quejoso *****
***** , contra actos del Titular de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.

Debe decirse que la aplicación de las jurisprudencias antes citadas, se hacen sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que “La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se

Notifíquese personalmente. (...)”.

“PRIMERO. La inexistencia de una causal manifiesta e indudable de improcedencia.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues solo por excepción en los precisos casos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional. Al

“Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.”

Toda vez, el Juzgador no consideró que en los términos anteriores, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, porque se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional tomó en consideración que se actualizaba la causal de improcedencia establecida

¹ Novena Época. Registro: 186605. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 2a. LXXI/2002. Página: 448.

Si bien, es cierto que existen recursos ordinarios que deben ser agotados de manera previa al juicio de amparo, ello no es aplicable a todo caso. De ahí que la propia Ley de Amparo considere que existirán excepciones al principio de definitividad, incluso por omisiones cometidas por la Representación Social en la investigación del delito.

Por lo anterior, es evidente que no se estaba frente a una razón notoria y certera que ameritara el desechamiento de la demanda, mucho menos que pudiera surgir de un análisis integral y minucioso de la misma. A fin de dilucidar adecuadamente las omisiones reclamadas a los titulares de la Fiscalía General y Fiscalías Especializada era necesario que el A quo realizara un estudio sobre los recursos que pudieran considerarse obligatorios previo al juicio de amparo, tomando en cuenta la posibilidad jurídica y real del quejoso para interponer esos recursos conforme a los argumentos planteados en los apartados de procedencia de la demanda e interés legítimo.

Tales consideraciones no pudieron haberse resuelto con la sola lectura de la demanda de

En consecuencia, al no acreditarse los requisitos anteriormente descritos no puede concluirse en que exista una causal de improcedencia manifiesta e indudable o se tenga incertidumbre de su actualización y por ende, no debe ser desechada la demanda. Contrario a los razonamientos del órgano jurisdiccional, debe atenderse a la regla general que estima procedente el amparo, con el objeto de impedir a la persona gobernada del derecho de ejercer la acción contra un acto que estima le causa perjuicio.

De acuerdo a lo establecido por el A quo, la demanda de amparo fue desechada por existir un recurso capaz de subsanar las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, conforme al contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Conforme a dicha disposición, el A quo estableció que la Miscelánea Penal permite que las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras sean reclamadas mediante un recurso innominado ante el Juez de Control, de forma anterior al ejercicio de la acción constitucional.

Toda vez, la argumentación y normativa empleadas no son aplicables al caso que nos ocupa por los elementos personal y material del recurso innominado señalado por el órgano jurisdiccional, mismos que inhiben de la obligación de agotarlo

a) Elemento personal

Dicha cuestión, adquiere relevancia para comprender la inexistencia de deber alguno para agotar el recurso previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual ha sido entendido a nivel jurisprudencial como propio de la víctima u ofendido:

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

atona

2 Época: Décima Época. Registro: 2021064. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II. Materia(s): Común, Penal. Tesis: PC.I.P. J/61 P (10a.). Página: 1430.

En relación a la importancia del amparo como recurso adecuado y efectivo para la protección de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha vertido el siguiente criterio jurisprudencial:

JAIMÉ RAMÍREZ MOLINA
70.6a:66.20.63.6a:66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

En el asunto específico, el interés que se aduce para acceder a la vía constitucional es suficiente, real y jurídicamente relevante derivado de la afectación colateral generada en la esfera del suscrito, como titular del órgano adscrito a la

³ Época: Décima Época. Registro: 2021551. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 8/2020 (10a.). Página: 589

La fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, publicada el 2 de abril de 2013, se amplió para otorgar el carácter de parte quejosa a aquella persona que refiera “ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la [Ley de Amparo] y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Así, se reconoció que el principio de instancia agraviada que rige el juicio de garantías, podía asistir cualquier persona o grupo que resintiera una afectación en su esfera jurídica, pese a no ser titular de un derecho subjetivo. Derivado de este reconocimiento y la apertura del amparo por interés legítimo, una opción única fue dotada al quejoso para impugnar los perjuicios ocasionados por las omisiones del personal de la Fiscalía General y sus Fiscalías Especializadas, en el desarrollo de sus atribuciones en la lucha contra la impunidad en materia de tortura, cuestiones que fueron ampliamente expuestas en la demanda de amparo.

b) Elemento material

De conformidad con los planteamientos de la resolución que aquí se recurre, las omisiones reclamadas en el juicio de amparo interpuesto pueden ser solucionadas mediante el juez de control por medio del multicitado recurso innominado, en virtud de haberse creado, inter alia,

Sin embargo, debe hacerse hincapié en que el recurso se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto, corresponde al Sistema Penal Acusatorio. Dicha cuestión, implica que aun cuando el medio de defensa tenga la posibilidad de conocer y subsanar las abstenciones u omisiones cometidas por el Ministerio Público, éste solo puede ser utilizado en investigaciones iniciadas como carpetas de investigación, no averiguaciones previas.

Dicho criterio expone claramente la aplicabilidad del recurso innominado como medio de defensa legal para las investigaciones llevadas conforme a las reglas del Sistema Penal Acusatorio, no para aquéllas tramitadas bajo el Sistema Inquisitivo Mixto. En otras palabras, las omisiones en la etapa de investigación que ocurran en una averiguación previa no podrían ser reclamables por esta vía.

⁴ Décima Época, Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J.27/2018 (10a.). Página: 45.

Así, pese a que la denuncia del suscrito relativa a la comisión de tortura o malos tratos fue interpuesta en el Sistema Penal Acusatorio, la obligación constitucional y convencional en materia de tortura e investigación de delitos demandaba el inicio de una averiguación previa en cuanto tuvieron la primera noticia de su posible comisión. De no haber cumplimentado este deber, las responsables demostrarían la violación de un rubro tan importante para la debida diligencia de investigación de graves violaciones a derechos humanos: la inmediatez en el comienzo de la indagatoria correspondiente, tanto en sentido formal como material.

En la especie, las autoridades tuvieron conocimiento sobre los actos de tortura o malos tratos perpetrados en perjuicio de *****
***** , mediante su declaración de 23 de octubre de 2012 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En dicha entidad, el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor el 14 de junio de 2016.

De esta manera, es claro que la indagatoria en el presente caso corresponde a una averiguación previa y no una carpeta de investigación, por lo que no puede establecerse como obligatoria la interposición de un recurso ordinario previo al juicio de amparo. En el mismo sentido, el siguiente criterio jurisprudencial expone con mayor literalidad la imposibilidad de agotar recursos ordinarios que no se encuentran previstos en la legislación aplicable a una averiguación previa:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO SE

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

que no
artículo
aplicable
depende
ciones
conforme
exigencia
o de de
do los c
ap
adicional
ndo”⁵.

ra inv
e cas
ífico
radas
del

leas, d
o fue
íficas
por la
Contr
nudació
e todas
lich a
es
vigen
curso;
pecífic
no así
ometid

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

En atención a todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse en que las omisiones impugnadas constituyen una excepción al principio de definitividad, puesto que no existe la obligación de agotar recurso ordinario alguno previo a la interposición del juicio de amparo para el quejoso: al no tener la calidad de víctima u ofendido, ni corresponder el caso a una carpeta de investigación o reclamar omisiones específicas en la indagatoria; cuestiones que acreditan la ausencia de actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX en relación con el numeral 113 de la Ley de Amparo.

(...)"

QUINTO. Análisis de los agravios.

Uno de los motivos de disenso formulados por la parte recurrente es **fundado**, suficiente para revocar el auto impugnado, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja en su favor, acorde a lo establecido por el numeral 79, fracciones III, inciso a) –dado que el quejoso es una persona privada de su libertad, con motivo de la instauración de un proceso penal en su contra-

Al caso, resulta aplicable la tesis aislada 1a. CXCIX/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 415, Tomo XXX, noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O

$$(\dots)''$$

contrap
el
artículo
o, publ
el diez
abro
undo
de l

Labro
undo
de l

le abril
de la d
ria per
umeral
de la r
s idénti
ra aplic
da por
ticia c
de dos
al de
registr

על

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE

En efecto, en un punto jurídico del **segundo motivo de inconformidad**, el disidente manifestó que el A quo perdió de vista que, en el caso, la causa de improcedencia que invocó, no

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

En apoyo de sus argumentos, el
inconforme citó el criterio de rubro:

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Los argumentos de previa síntesis son
sustancialmente **fundados**.

Ciertamente, el artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone:

“Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.”

Del análisis de la disposición legal transcrita se desprende que para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, es indispensable que exista un motivo de

Por ello, cabe precisar que por “*manifiesto*” debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la simple lectura del escrito de demanda, de la aclaración de la misma o de su ampliación, en su caso y, de los documentos que se anexen a tales promociones; y por “*indudable*” que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.

esto e
clara y
manda
se ten
stencia,
ente s
los
manda,
e indu
mente c
adver
la lect
ra adv

manda,
e indu
mente c
adver
la lect
ra adv

ura adve

probada
chos e
claramen
estén au
bles, d
e llega
stificado
respons
éstas y
el pr
s pa
ni tam

Los razonamientos anteriores tienen sustento, en cuanto a la explicación de los conceptos de los vocablos "*indudable*" y "*manifiesto*", en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

“DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia

...da y
...n y as
...udas, ya
...apoya
...e por el
...acredita
...es, de
...s que
...les, los
...s demás
...ento, n
...dicha
...esvirtuan
...zarse es
...ausa de
...o tener
...desecha
...se estan
...instar
...ue le c
...nitirse a
...a fin de
...lanteada
...al form
...c. J/19
...giado e
...cada e
...1999,
...su Gac
...3379 d

De igual forma, es de compartirse la diversa I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 193379, de contenido siguiente:

“DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.”

No se soslaya que este último criterio interpretó el numeral 145 de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, el contenido del mismo se trasladó al diverso 113 de la legislación de la

De tal suerte que, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable que provoca el desechamiento de la demanda de amparo es aquél que se advierte patente y claramente del ocuroso inicial, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a tales promociones; de modo tal, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

Consideración que a criterio de este órgano colegiado deviene incorrecta, toda vez que el motivo de improcedencia que originó el desechamiento de la demanda inicial, no es manifiesto ni indudable.

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;

De la disposición transcrita se deduce que

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor

Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable.

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

de rev
es, par
esario
en la
revoca
era Sa
stenido
ro, un
que
ocedim
que te
arlo.⁷
sulta
3 (10a

Consulta

13 (10a)

Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 62/2013 (10a.), de la referida

⁷ Véase el contenido de las contradicciones de tesis 317/2011 y 526/2012, ambas falladas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de noviembre de 2011 y 15 de mayo de 2013.

Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación,
publicada en la página 326, Libro XXIII, Agosto
de 2013, Tomo 1, de la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, número
de registro 2004140, de contenido siguiente:

“ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, se advierte que contra la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en una

$\frac{1}{J}$

del m
a pág
del Ser
aceta

número de registro 2000300, de rubro y texto
siguientes:

“ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). En términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotar esos recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, contra la determinación del Procurador General de Justicia del Estado que confirma el no ejercicio de la acción penal. De ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y materialmente, y tener como efecto revocar,

irse en la cita impone el silencio de la definición anterior es a citado la mas ambigua a una a las a la e rio de

a obs
referi
o de o
ral 73,
ogada,
l se tra

orden
este
correcto
amparo
ado que
el caso
o de in
r, porq
sa de
sto en e
Proce
uzgado
acto

Para sí explicarlo, resulta necesario precisar que, de las constancias que integran el expediente de amparo, con valor probatorio en

dimiento
Ley de
su nul
esentad
e, ante
ndo de
sidenci
de am
Comba
os del
movió j
ad y po
n:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

2. **** *, Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con domicilio público ubicado en ... (...).

3. ***** , Titular de la
Fiscalía Especial en Investigación del
Delito de Tortura, con domicilio ubicado
en ... (...).

“a) Del Titular de la Fiscalía Especial en Investigaciones del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República:

La omisión de investigar inmediatamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable, actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados, conforme a los estándares Nacionales e Internacional en materia de Derechos Humanos.

b) De la Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos:

La omisión de supervisar que el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, investigue de manera inmediata, con la debida diligencia y en un plazo razonable, actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados,

c) Del Titular de la Fiscalía General de la República:

De acuerdo con el ejercicio de la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General de la República, las omisiones en la coordinación y supervisión de la actuación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en lo que atañe a la investigación inmediata, con la debida diligencia y en un plazo razonable de actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados, conforme a los estándares Nacionales e Internacional en materia de Derechos Humanos”.

2) Por auto de **ocho de junio de dos mil veinte**, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula, Chiapas, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la tuvo por recibida y la registró bajo el expediente *********; asimismo, previno a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir de la legal

a) Cuál es el acto que reclamó a las autoridades responsables, esto es, precisara si lo que reclamó era la omisión de acordar el escrito de siete de septiembre de dos mil diecinueve o bien la negativa de la Fiscalía Especializada en Materia de Investigación de Delito de Tortura, traducido en los actos que refirió en el apartado correspondiente de su escrito de demanda.

b) Señalara o precisara los antecedentes del acto reclamado, debiendo informar el estado procesal en que se encontraba la causa penal 140/2012, instaurada al quejoso.

c) Manifestara quién era el defensor de

***** o en su caso, si dicha

(fojas 29 a 33 del juicio de amparo indirecto).

3) Atento a lo anterior, mediante escrito recibido electrónicamente en el Juzgado Federal el diez de junio de dos mil veinte, la referida parte impetrante del amparo, dio cumplimiento a la prevención efectuada, lo cual, hizo en los siguientes términos:

“...1. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no reclamo puntualmente la omisión de acordar la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, sino la inacción que dicha autoridad y las demás señaladas como responsables han demostrado en la investigación adecuada y diligente de los probables actos de tortura o malos tratos cometidos en perjuicio del señor ***** , en diversas

Lo anterior, revela que el juzgador del amparo apreció incorrectamente el reclamo efectuado por la parte quejosa, lo que condujo a estimar una causa de improcedencia que no se actualiza al caso concreto.

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que sustenta el criterio invocado, P./J.40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto:

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo”.

Así pues, de los elementos que obran en el expediente de amparo, se advierte que, en la

“...Se afirma lo anterior, en atención a que las responsables tuvieron noticia de los hechos delictivos -constitutivos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes- durante la vigencia del Sistema Penal Inquisitivo Mixto. Pese a que la denuncia se interpuso estando vigente el Sistema Penal Acusatorio, las autoridades investigadoras tuvieron conocimiento de los hechos durante la vigencia del sistema previo, y por ende, correspondía la obligación de iniciar una averiguación previa.

Derivado de ello, no es obligatorio el agotamiento de recurso ordinario alguno, particularmente el previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (control judicial), pues si bien es un

Al ser investigación del presente caso, propia del sistema tradicional inquisitivo mixto (averiguación previa) y no del sistema penal acusatorio (carpeta de investigación), por la fecha en que las autoridades responsables tuvieron conocimiento de los hechos, resulta materialmente imposible para el suscrito interponer el control judicial o acudir al juez de control, puesto que dicho recurso y figura jurídica no se encuentran previstos en la normativa penal aplicable.

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

IX. ANTECEDENTES

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las omisiones que constan y constituyen antecedentes de los actos reclamados son los siguientes:

Ante la apremiante necesidad de coordinar e impulsar esfuerzos institucionales para el combate a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y considerando que la práctica de la tortura y malos tratos en México es generalizada, el 24 de junio de 2019 el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, *****

***** emitió la circular 14/2019, en la cual se establecen las funciones de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Cruels e Inhumanos, cuyo objetivo es diseñar, implementar y coordinar esfuerzos institucionales para el combate de la

Con motivo de la emisión de dicha circular, se solicitó a las y los defensores públicos federales adscritos a las Delegaciones del Instituto, remitieran informes mensuales con la información relativa a asuntos donde hayan tenido conocimiento de posibles actos de tortura o malos tratos cometidos en perjuicio de personas representadas por el Instituto.

En relación a los hechos que rodean la detención y posibles actos de tortura en perjuicio del señor ***** (sic), debe advertirse lo manifestado en su declaración preparatoria de fecha 23 de octubre de 2012, la cual obra en la causa penal ***** ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas: “(...) No está de acuerdo con el parte informativo que se le leyó, ya que los policías que lo detuvieron lo estuvieron golpeando en diversas partes del cuerpo (...)”

Derivado de la indiferencia y negligencia de las autoridades responsables, sigue sin

sticia y
os de la
1 ibíden
al — c
—
el Jue
mparo

que
sión de
te la Fis
ito de T
toridad
respon
stigació
es acto
en perj

mer mo
co de
de tort
).

anterior
vertir d
existe

Así, de los anteriores elementos allegados, es posible advertir que, si bien es cierto que en autos existe una denuncia presentada por el ahora recurrente, ante el Fiscal

Especializado en Investigación del Delito de Tortura, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 23 y 24 del expediente de amparo), la cual, de acuerdo a la fecha en que fue presentada, se encuentra sujeta al sistema penal de corte acusatorio y oral (el cual entró en vigor en todo el país, a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis)⁸, en el que, en efecto,

8 Ilustra lo anterior la tesis XXII.P.A.8 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 2414, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2015337, de contenido siguiente: **“CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL SER APLICABLE PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS HECHOS HAYAN OCURRIDO ANTERIORMENTE, BASTA QUE LA DENUNCIA O QUERRELLA SE PRESENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO INICIE LA INVESTIGACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE DICHO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).** El decreto por el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro declara que en la legislación local ha quedado incorporado el sistema procesal penal acusatorio, y el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial de la entidad "La Sombra de Arteaga", el 29 de marzo de 2014, reformado por última vez el 20 de mayo de 2016, establece en su artículo tercero que las disposiciones de ese código regirán la sustanciación de los procedimientos penales, respecto de los hechos que ocurran con posterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, que operará de manera progresiva en el territorio del Estado, bajo una modalidad gradual y regional. Precepto que guarda congruencia con el primer párrafo del artículo tercero transitorio del propio código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, que dispone que los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas vigentes a la entrada en vigor de ese Código Nacional, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de su entrada en vigor, quedarán abrogados. Sin embargo, esas disposiciones normativas quedaron superadas con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el medio de difusión oficial federal indicado el 17 de junio de 2016, y que entró en vigor al día siguiente, ya que reformó y adicionó el artículo tercero transitorio referido de dicho Código Nacional, en el sentido de que éste será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a ésta. De manera que basta que la denuncia o querrella se presente durante la vigencia del Código Nacional mencionado (18 de junio de 2016), para que el Ministerio Público inicie la investigación de los hechos conforme a las reglas de ese ordenamiento, por ser la primera etapa del procedimiento, de conformidad con su artículo 211, con independencia de que los hechos denunciados hayan ocurrido antes de su vigencia, pues lo que determina la aplicación de esa legislación procesal, es el momento de la iniciación del procedimiento penal.”

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

⁹ Se hace referencia a las jurisprudencias 27/2018 (10a) y 28/2018 (10ª) de rubros: “**SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES**”; y, “**SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO**”.

En efecto, conforme al marco constitucional¹⁰ y convencional¹¹, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del *jus cogens*

¹¹ Previsto en los artículos 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

os ve
humano
configu
mpacto
omete,
n de p
n moti
osoluta
las juri
cia, as
vincula
n pr
denun
a autori
investi

Derivado de ello, absolutamente todas las autoridades, entre ellas, las jurisdiccionales de primera y segunda instancia, así como las de amparo, se encuentran vinculadas nacional e internacionalmente, tan pronto tengan conocimiento de una denuncia de esta naturaleza, a dar vista a la autoridad competente para que inicie una investigación pronta, minuciosa e imparcial para que aclare dicha

Así también lo ha interpretado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha establecido que respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones:

- 1) La investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata;
- 2) La investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento;

rechos
gurar to

debe

prestar

Es aplicable a lo anterior, la tesis P. XXI/2015 (10a.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 233, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2009996, que establece:

“ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los

del o
urar to
os de to
ntizar la
de salud
tencia a
efectua
necesari
para la
na perso
o de to
r lugar,
s de un
ebida d
de este
lo que r
denunci
para de

la aut
estacio
o cuan
diatam
co par
depend
estigaci
gen y n

Ahora, cuando dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura.

Por tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró relevante destacar que, con independencia de la

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 1a. LVII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 1425, Libro 15, Febrero de
2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, número
de registro 2008505, de contenido siguiente:

“TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN. La investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de forma inmediata; además será imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; ii) identificar a los responsables; e, iii) iniciar su procesamiento. Ahora bien, corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; de ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión. Así, cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia, a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, para lo cual, la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción

País, desde 2011, el 90 por ciento de los registros de homicidios se atribuyen a la violencia organizada.

País, p
de 201
ficial de
regist

el mismo
2015 (1

Y, en el mismo sentido, es ilustrativa la tesis 1a. LIII/2015 (10a.), de la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1424, Libro 15,

Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, número de registro 2008503, que
establece:

“TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE CUANDO LA ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.

El artículo 173, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; así, la omisión del juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura alegados por los procesados constituye una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante coacción.”

Así, atendiendo a que la parte quejosa,
reclama la omisión de las autoridades señaladas

*****, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, desde el primer momento en que tuvieron conocimiento de ese hecho, esto es, a raíz de la declaración preparatoria de la referida víctima, receptada el veintitrés de octubre de dos mil doce, dentro de la causa penal *****, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Nuevo Laredo; es inconcuso que su reclamo se centra en la falta de integración de una averiguación previa -a través de un proceso incoado en el sistema penal inquisitivo- para esclarecer tales hechos (por virtud de la fecha en que se tuvieron conocimiento de los mismos, esto es, el veintitrés de octubre de dos mil doce), por

mechanis
ral 25
os Per

ferido
de la
del
teria fe
amauli
cional
quejoso
mil die
los lla
no

“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de abril de 2016, en los Estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz; y a partir del 14 de junio de 2016 en los Estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (...)”

sta su
ales ar
al de
artículo
reforma
s mil o
deno
plemen
sal pe
de

ludido
o 258
s Pena

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

Al respecto, es de **compartirse** la tesis

II.2o.P.88 P (10a.), emitida por el Segundo

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO SE ACTUALIZA SI LOS ACTOS DE OMISIÓN O DECISIONES RECLAMADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EMANAN DEL TRÁMITE DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE DEBA LLEVARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, Y NO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refieren al proceso penal acusatorio, único del que pueden conocer los llamados "Jueces de control", mas no así de los procedimientos de corte tradicional que siguen rigiéndose hasta su conclusión conforme a las reglas procesales anteriores, en este caso, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado y acorde con el artículo cuarto transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que así lo determinó en

atención a la denominada "carga cero", como criterio aplicado en el sistema de implementación del nuevo sistema de justicia procesal penal en lo tocante a la competencia de los órganos judiciales operadores. Por tanto, los Jueces de Procesos Penales Federales no tienen competencia para conocer del recurso a que se refiere el citado artículo 258, ni los Jueces de control que pueden conocer del nuevo sistema, la tienen para conocer del referido recurso cuando se reclaman omisiones o decisiones derivadas de una averiguación previa iniciada antes de la entrada en vigor del nuevo sistema; de modo que no puede pretenderse que el quejoso agote dicho recurso ante el Juez de control cuando éste carece de competencia para conocer del recurso señalado tratándose de "averiguaciones previas" y no de carpetas de investigación; de modo que en estos casos resulta incorrecto que el Juez de Distrito pretenda desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que no se agotó el recurso previsto en el artículo 258 indicado, pues éste no le resulta aplicable al supuesto en cuestión; ello, con independencia de que tratándose de averiguaciones previas, sean otros los parámetros conforme a los cuales pueda determinarse la exigencia o no de la definitividad como motivo de desechamiento, según lo han determinado los criterios de los tribunales federales, aplicables al procedimiento de tipo tradicional conforme al cual debe seguirse rigiendo."

Por el contrario, al referirse el reclamo de la parte quejosa, a la abstención del ministerio público de investigar diligentemente de un hecho

uible
 tablecio
 a Naci
 la p
 cto, pu
 rnado e
 persecu
 lo qu
 e la C
 los Me
 e las d
 rio Púb
 que le
 iaría a
 nstitucio
 ejercio
 ara exig

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 65/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 66, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 173828, de contenido siguiente:

“AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIARLA DESPUÉS DE FORMULARSE UNA DENUNCIA DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO PERSEGUIBLE DE OFICIO. El juicio de amparo indirecto es procedente en términos del artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, en contra de la abstención del Ministerio Público de iniciar una averiguación previa ante una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos perseguibles de oficio, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 113 y 118 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ello es así, pues tal omisión representa dejar al gobernado en estado de incertidumbre respecto a la

Ahora, no se inadmiente que la fracción XIX del artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala:

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

(...)"

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Sin embargo, no puede estimarse que dicha circunstancia represente la obligación de la parte quejosa de agotar el principio de definitividad, previo a acudir al juicio de amparo, puesto que se encuentra en uno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XX, de la legislación de la materia.

Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma.

JAIME RAMIREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.1
2021-04-22 09:54:50

Así, el referido recurso previsto en el artículo 141 del Código Federal de

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50



encia
za, sea
ado, d
de Amp
emente
ea o no
o con
on es c
para
ahí ex

aplic
que
2009,
na Cort

Marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 165016, que establece:

“INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como de los diversos 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se advierte que contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, el denunciante, querellante u ofendido podrá promover recurso de inconformidad. Por otro lado, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de garantías es preciso que el medio de defensa sea legal y que a través de él pueda modificarse o revocarse el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión definitiva. En ese sentido y tomando en cuenta que la referida inconformidad: a) es un medio de defensa que se tramita en la vía administrativa (ante la mencionada procuraduría), no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma

b) no es un recurso administrativo y no puede ser recurrido.

de el
racción
sin e
a una
concreto
meral
de la le
de la ju
a la
Amparo
término
a.

de com

“OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO NO LES RESULTA EXIGIBLE AGOTAR EN SU CONTRA EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 150, FRACCIÓN XIV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR ESTIMARSE OPTATIVO. Las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos actualizan una hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, y que por la naturaleza penal de esas abstenciones, así como del carácter del Ministerio Público que las produce al tratarse de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, las reclamadas a través del juicio de amparo encuadran en los supuestos de excepción al principio de definitividad contenido en los preceptos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, del ordenamiento secundario

JAIIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a:66.20.63.6a:66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Máxime que, hasta este momento no se conoce el contexto de la omisión reclamada por la parte quejosa, por lo que la sola posibilidad de un recurso por sí mismo no es una circunstancia que surja como tema del desechamiento de la demanda, sino que es conveniente iniciar la tramitación de esta última, a fin de estudiar

Cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3715, Tomo LXX, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, número de registro 327723, que dice:

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

“DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA. La existencia de un posible recurso, contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión; sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo, aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia.”

Luego, se estima que no procedía desechar la demanda de amparo, ya que no se actualiza la causa notoria y manifiesta de improcedencia que llevó al juez federal a emitir una resolución en ese sentido; como

Bajo esa línea de pensamiento, ante lo fundado de los argumentos formulados, lo procedente es, con apego en el artículo 103 de la Ley de Amparo, declarar fundado el recurso de queja; por ende, se revoca el acuerdo recurrido y se ordena al Juez de Distrito emita un nuevo auto en el que provea sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata en términos de los artículos 112 a 115 de la legislación en cita, salvo que exista un motivo diverso de improcedencia que sea indudable y manifiesto, o bien, la necesidad de prevenir a la solicitante de garantías en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo.

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no

3

Con a
Ley F
informac
de la Fe
ciséis, l
del p
soliciten
a la in
los qu

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Apoya lo anterior el criterio 3/2006, emitido por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de julio de dos mil seis, cuyo rubro y texto

Por otra parte, una vez que se notifique a las partes la presente resolución y con apoyo en los artículos primero y segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en la circular 1/2004, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

Por lo expuesto, fundado y con apoyo
además en los artículos 97, fracción I, inciso a),
99 y demás relativos de la Ley de Amparo, se;

PRIMERO. Se declara **fundado** el recurso de queja.

JAIME RAMÍREZ MOLINA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.94.11
2021-04-22 09:54:50

TERCERO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, o así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos establecidos en el **último considerando de este** asimismo, se ordena glosar la constancia de la firma de sentencia en el Sistema Integral de Gestión de Expedientes.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de origen, anótese lo conducente en el libro de

into con

del Segundo
al y C
de
Irma
así con
ández,
Magistr
Comisi
Judica
de cinco
inos c
Orgán
n, sier

En términos de lo previsto en los artículos 1, 9, 68, 97, 98, fracción III, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información legalmente considerada como reservada, confidencial o datos personales, que encuadra en esos supuestos normativos. Doy fe.

Secretario: Lic. Jaime Ramírez Molina

El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el licenciado Jaime Ramírez Molina, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de DATOS PERSONALES.. Conste.